

## HACIENDA.

Desde que las necesidades de los pueblos, el desarrollo de sus múltiples intereses y las exigencias de una civilización creciente hicieron preciso el recurso de la contribución territorial, fué objeto constante de los Gobiernos y motivo de estudio para todos los estadistas fijar la base del impuesto y su equitativa distribución.

Difícil siempre este resultado, son largos y costosos los medios que la ciencia aconseja para obtener un catastro verdadero de la propiedad, del cual ha de partir el conocimiento de la riqueza territorial imponible y la graduación de las fuerzas contributivas del país. Muchos años, personal numeroso é idóneo y cuantiosos gastos supone el solo planteamiento de los medios científicos de investigación.

Ni el estado del Tesoro de Puerto-Rico consentía espera tanta, ni un gravamen de tal naturaleza su producción, cuando las circunstancias obligaron á establecer en la Isla el impuesto directo, ni por otro lado propendía el Fisco á extraer de la propiedad todos los recursos de que era susceptible, sino únicamente aquella parte indispensable al sostenimiento de las cargas públicas.

Bajo este criterio, adoptó como tipo del impuesto el 5 por 100 de los productos con un 35 por 100 á deducir por gastos de explotación; y para fijar el cupo correspondiente á cada pueblo ó término municipal, en vez de recurrir al medio lento y de todos modos falible de nombrar previamente Comisiones investigadoras, el Estado, inspirándose en la rectitud y moderación de sus propósitos, prefirió apelar al testimonio de los mismos pueblos.

Con igual criterio, el reparto anual del cupo entre los contribuyentes, no fué practicado por agentes administrativos especialmente nombrados por el Gobierno, sino por los Ayuntamientos respectivos, auxiliados por Juntas repartidoras compuestas de vecinos de la localidad, cuyas colectividades eran, sin duda, las que podían apreciar mejor y más benignamente las fluctuaciones á que de un año para otro, y por causas muy diversas, se halla sujeta la riqueza privada.

Tal fué el sistema seguido para el planteamiento de la contribución territorial en esta provincia; y si la exactitud de su resultado puede ser *á priori* recusada, no solo por la crítica científica, si que también por el sentido común, forzoso es confesar que no es posible emplear otro procedimiento, no disponiendo de medios para llevar á efecto los necesarios trabajos estadísticos.

No desconocía la Administración que la riqueza confesada por los contribuyentes no era la que realmente existía; que el cupo de cada pueblo, resultado de las declaraciones individuales, implicaba una ocultación de riqueza, pues, dudarle, sería desconocer el poderoso estímulo del interés privado.

Mas, no obstante esta racional presunción, no han cesado las quejas, ni el clamor constante que suscita en esta provincia la cobranza de la contribución territorial; pero nadie ignora que estas quejas tienen su origen, no en la importancia del tributo, sino en la manera de repartirlo: el rico, preciso es confesarlo, influyente siempre en el Ayuntamiento, en la Junta repartidora, oculta sus utilidades, y hace que los de mediana y escasa fortuna levanten la carga que él debiera soportar.

Convencida en todos tiempos la Administración de que el tributo no gravaba ni en un 4 por 100 la riqueza líquida, considerada en conjunto la producción de la provincia, pero deseosa de robustecer ese convencimiento hasta elevarlo á completa certeza, pidió á los Ayuntamientos en el año de 1879 nota de productos y de gastos de todos los ramos de la explotación agrícola: los obtiene los, de los cuales hay que descartar la propensión irresistible á disminuir los productos y exagerar los gastos, auxiliados con los factores de la estadística de exportación por las Aduanas y el consumo graduado al país, en la mas ínfima escala, justifican de una manera irrefutable el principio anteriormente sentado: que el impuesto no llega al 5 por 100 de las utilidades líquidas y que las quejas que contra él se exhalan tienen su fundamento en la desigualdad de su distribución.

Tiempo há que venia sintiéndose en esta provincia la imperiosa é ineludible necesidad de reunir en un solo Código ó Reglamento cuanto se hallaba preceptuado acerca de este impuesto. La dispersion de las disposiciones hacía difícil su conocimiento, que, si en todos los asuntos de la Administración es indispensable sea profundo, para emplearlas con acierto, en el de que se trata lo es tanto mas, cuanto que la materia es vasta, compleja y tan trascendental que afecta á la mas numerosa masa de contribuyentes en una provincia. Desde 1876 datan las disposiciones de este Gobierno General para llevar á cabo la obra, y la Administración actual ha tenido la satisfacción de darle cima.

El Reglamento provisional para la imposición, administración y cobranza de la contribución territorial en esta Isla, aprobado por Real orden de 24 de Agosto próximo pasado y publicado en las GACETAS de 13 y 16 de Noviembre último, suministra á los medianos y pequeños propietarios cuantos medios de defensa necesitan para contrarrestar las exigencias de los ricos, si saben aprovecharlos. Consecuente con lo que ya se hallaba establecido, dá igual representación en la Junta repartidora á los que paguen mayores, medias é ínfimas cuotas, prescribiendo además que en el triple número de contribuyentes de que el Ayuntamiento ha de asociarse para la elección de peritos, estén forzosa representados todos los barrios que componen el Distrito municipal. Pero esa garantía, esa poderosa palanca de que la Administración ha creído conveniente proveerles, animada del mas noble de los sentimientos de justicia, será ineficaz, si se deja pasar como hasta aquí por regla general, sin utilizarla. Si tal sucede, cúlpanse á sí propios los pequeños y medianos contribuyentes, no á la Administración, y sufran resignados las consecuencias de su abandono.

Otra de las graves objeciones que al tributo se hacen,

es la desigualdad de distribución entre Distrito y Distrito municipal. Puede decirse de ella lo mismo que de la desigualdad entre los contribuyentes: no existiría sin el afán por parte de los Ayuntamientos de ocultar la riqueza. El que realmente se crea perjudicado con relación á otros, abierto, tiene el camino para reclamar de agravio; abundantes y detallados medios les dá el Reglamento para justificar la queja; pero de este extremo se huye cuidadosamente, y la Administración que ha fijado los cupos por una riqueza confesa la por los mismos contribuyentes, y comprobada por los datos de exportación y cálculo racional de consumo, no debe ni puede hacer caso para bajar el cupo, de vagas declaraciones.

La Administración no desconoce que la producción tiene sus alternativas; pero con absoluta carencia de medios para justificarlas, le es forzoso confiarse en la buena fé de los contribuyentes y de los Ayuntamientos: no es obstinada, ni deja de estar atenta á la marcha de la producción: buena prueba dió de ello cuando de su propia y espontánea iniciativa solicitó del Gobierno de S. M., y obtuvo de su paternal amparo, la elevación de los gastos de cultivo desde el 35 al 50 por 100: nunca ha cerrado ni cerrará sus oídos á lo justo, luego que le haya sido demostrado de una manera convincente; mas, llamada á conciliar las necesidades del Fisco con las fuerzas de los contribuyentes, no debe acoger con irreflexión las quejas, por lo que pudieran tener de infundadas, ni desatenderlas cuando la razón las apoya.

Inspirado el Reglamento, no en el deseo de aumentar los cupos actuales de la contribución territorial, sino únicamente en la mira de hacer desaparecer en lo posible las desigualdades é irregularidades que se notaban en la percepción del impuesto, todo en beneficio del contribuyente y en pró de los principios de equidad y justicia, contiene en sencillas reglas, al alcance de la mas vulgar inteligencia, cuanto el propietario, las Juntas repartidoras y los Ayuntamientos, tienen necesidad de saber para deducir muy aproximadamente la utilidad de la producción, ó materia líquida imponible. Fielmente y sin pasión observado, se obtiene con el menor de los sacrificios el mas bello de los desiderata: en todo acto en que esas condiciones presiden, es fácil el acierto; pero cuando faltan, no hay Ley que no se falsée, ni pensamiento que no se esterilice.

No son ciertamente de menor importancia los beneficios que otorga á los contribuyentes la nueva Instrucción de apremio para hacer efectivos los débitos á favor de la Hacienda pública.

Si la imperiosa Ley de la necesidad hizo preciso el empleo de rigurosos medios coercitivos en la que ha estado vigente hasta el mes de Diciembre último, á ese procedimiento duro y ruinoso ha sucedido otro equitativo y justo. Ya no se dará el caso en el tercer grado de apremio, de proceder al embargo y venta en remate de valiosas fincas para hacer efectivos insignificantes sumas, adjudicándose en último extremo al postor que ofreciera el pago del débito y costas causadas ó en su defecto al Estado, sino que el embargo ha de limitarse únicamente á la porción de bienes que se considere suficiente para cubrir aquellas responsabilidades.

Y no es este el solo beneficio que concede la nueva Instrucción. De la misma manera, el recargo del 12 por 100 que por demora en el pago se imponía á los contribuyentes, se ha rebajado por ella al 7 por 100, así como las dietas y costas de los apremios han disminuido en mas de una tercera parte por lo que respecta al cobro de los débitos de mediana cuantía, sin que se hayan elevado en los demás; prueba inequívoca del interés y solicitud de la actual administración por aliviar la suerte del contribuyente y hacer menos vejatoria la exacción del tributo.

Si el fomento de la riqueza pública y privada es objeto siempre preferente de los esfuerzos de la Autoridad Superior, no tiene ciertamente menos derecho á su paternal solicitud la suerte de las clases desvalidas: á mejorar la de los pequeños contribuyentes se dirige esta excitación.

Ya que aún no se han terminado los repartimientos en la mayoría de los pueblos, ocasion es esta, todavía oportuna, de que este Gobierno General recomiende eficazmente se utilicen los medios que facilita el nuevo Reglamento para que, si no hubiere equidad en la distribución individual de las cuotas, acudan al Centro Económico los que se crean perjudicados. Como Autoridad Superior, como hombre honrado, como cristiano dirijo mi voz amiga á los Alcaldes, á las Juntas repartidoras, á las personas ilustradas, en fin, de toda la Isla, encareciendo á todos en nombre de la justicia, de un sagrado deber moral y hasta diré en nombre de la caridad que ayuden, que dirijan en sus justas reclamaciones á los medianos y pequeños propietarios, ignorantes por lo regular de las disposiciones legales que amparan sus derechos: que léjos de confabularse para explotarla, hagan en bien de esa clase, tan digna de protección y estímulo, nervio y apoyo de la sociedad en todas épocas, cuanto la equidad exige y la humanidad demanda. Contra una Junta repartidora; contra una mayoría de fuertes contribuyentes, sorda á sus sencillas quejas ó coligada en su daño, ¿qué puede; qué podrá en mucho tiempo, dado su atraso intelectual, el simpático y pobre *jibaro* de estos campos? Moralmente considerada, su situación es igual á la de la mujer indefensa y ¿qué corazón español no ampara á la mujer?

Puerto-Rico, 29 de Junio de 1881. — EULOGIO DESPUJOL.

Sres. Presidentes de las Juntas periciales de evaluación de la riqueza territorial. [3779]

## SECRETARIA.

## NEGOCIADO 2º

El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar participa al Excmo.

Sr. Gobernador General, en telegrama recibido ayer, que por Real Decreto publicado en la GACETA DE MADRID

Primero: Se declaren disueltos el Congreso de los Diputados y la parte electiva del Senado.

Segundo: Se previene que las Cortes se reunirán en Madrid el día 20 de Setiembre próximo.

Tercero: que las elecciones de Senadores y Diputados se verificarán en la Península, Islas Baleares, Cuba y Puerto-Rico con arreglo á las Leyes de 8 de Febrero de 1877, 28 de Diciembre de 1878 y 9 de Enero de 1879.

Y cuarto: Que las elecciones de Diputados se verificarán en todas las provincias de la Monarquía el día 21 de Agosto próximo y las de Senadores el día 2 de Setiembre siguiente.

Por orden de S. E. se publica en la GACETA para general conocimiento.

Puerto-Rico, 29 de Junio de 1881. — El Secretario del Gobierno General, Francisco Fontanals y Martinez. [3778]

## CAPITANIA GENERAL

## DE LA ISLA DE PUERTO-RICO.

## ESTADO MAYOR.

## SECCION 1ª

Por el Ministerio de la Guerra, con fecha 12 de Mayo último, se comunica á esta Capitanía General la Real orden - Circular siguiente:

“Excmo. Sr.: — S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido disponer que la regla 3ª de la Real orden - Circular de 14 de Octubre de 1878, se entienda adicionada con el siguiente párrafo: — “Se exceptúa el caso de que la enfermedad imposibilite al interesado para desempeñar el servicio ó cargo á que se le destine, cuya circunstancia ha de constar en el certificado facultativo que acompañe á la solicitud, ó en otro separado si esta hubiese sido ya cursada.” — Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de la Guerra, traslado á V. E. para su conocimiento y demás efectos.”

Lo que de orden de S. E. se publica en la GACETA OFICIAL de esta Isla para su conocimiento.

Puerto-Rico, 23 de Junio de 1881. — El Coronel Jefe de E. M., José de Nicolau. [3736]

## SECCION 2ª

El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en Real orden fecha 18 de Mayo último, dice al Excmo. Sr. Capitan General de esta Isla lo que sigue:

“Excmo. Sr.: — En vista del escrito de V. E. de 31 de Marzo último, devolviendo informada la instancia de Don Juan García Rodríguez, Capitan de Infantería retirado en esa Isla, con residencia en la Península, en súplica de justificar su existencia ante las Oficinas de Hacienda por medio de oficio, con arreglo á lo prevenido en el artículo 25 del Reglamento de la Orden de San Hermenegildo, por estar en posesión de la placa de dicha Orden; el Rey (Q. D. G.) se ha servido resolver que cuando sea necesario que los Caballeros de la Orden justifiquen el estar en posesión de la condecoración en cualquiera de sus grados, se les exija que exhiban la Real cédula ó acompañen copia autorizada de ella. — De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.”

Lo que de orden de S. E. se publica en la GACETA OFICIAL de esta Isla para conocimiento de quienes correspondan.

Puerto-Rico, 25 de Junio de 1881. — El Coronel Jefe de E. M., José de Nicolau. [3750]

## Junta Económica del Hospital Militar

## DE PUERTO-RICO.

No habiéndose llevado á efecto las subastas de ropas y efectos, víveres y medicamentos anunciadas para el día 18 del actual, ha dispuesto el Excmo. Sr. Capitan General de esta Isla se anuncien nuevamente para el día 8 del próximo mes de Julio; siendo de advertir que la primera ó sea la de ropas y efectos se celebrará á las doce del expresado día 8 y la de víveres y medicamentos á la una y dos de la tarde respectivamente del mismo día.

Lo que se anuncia al público para conocimiento de los licitadores.

Puerto-Rico, 25 de Junio de 1881. — El Secretario, Eduardo Gonzalez. — Vº Bº — El Director - Presidente, Pedro Peñuelas. [3764]

## Comisaría de Guerra

## DE PUERTO-RICO.

EL COMISARIO DE GUERRA INSPECTOR DE UTENSILIOS DE ESTA PLAZA.

Hace saber: que en virtud de orden del Sr. Sub-Intendente Militar de este Ejército de fecha 11 de Mayo próximo pasado, se procede á contratar hasta fin de Junio de 1882 y á contar desde el día siguiente al de la aprobación del remate por el Excmo. Sr. Capitan General, el suministro de aceite mineral para el alumbrado de las Guardias de esta Plaza, á cuyo efecto se convoca por el presente á cuantos